

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. ING. ROBERTO MACÍAS QUINTANILLA, PRESIDENTE Y LOS INTEGRANTES DE LA CMIC NUEVO LEÓN

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

14



Oficio Número D-CMICNL/0077/2024


Ciudad de Monterrey, Nuevo León a
30 de octubre de 2024

Comisión de Infraestructura del H.
Congreso del Estado de Nuevo León
Reforma a la Ley de Obras Públicas del
Estado y Municipios de Nuevo León.

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN LXXVII
LEGISLATURA
P R E S E N T E . -

Quienes suscribimos, Ing. Roberto Macías Quintanilla, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, Ing. Rogelio Morales Botello, Presidente del Comité Consultivo de la CMIC Nuevo León, Ing. Rodrigo Garza Tijerina, Secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, Ing. Jorge Alberto Villarreal González, Secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León Ing. Alberto Rodríguez Dávila, Vicepresidente de Enlace Legislativo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, y Lic. Hugo César Sánchez García, Director de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 Fracción I y XV de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en armonía con los artículos 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ocurrimos de la manera más atenta a presentar:

"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN V Y VII Y SE ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES IX, X Y XI, 8 FRACCIÓN I Y II, 12 PÁRRAFO PRIMERO, 14, 17, 18 FRACCIÓN II, 23, 23 BIS 1 PÁRRAFO SEGUNDO, 23 BIS 3, 23 BIS 4, 23 BIS 5, 28, 31, 38, 43 PÁRRAFO SEGUNDO, 49, 51 PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES VI Y VII, 52, 61



FRACCIÓN XI, 67 FRACCIÓN I, Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO SEGUNDO EN EL TÍTULO SEXTO, CONSISTENTE EN ARTÍCULOS 119, 120, 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN”, al tenor de la siguiente:


EXPOSICION DE MOTIVOS

La Industria de la Construcción en México representa un sector clave para el desarrollo económico del país, debido a su generación de empleo, y la ampliación de oportunidades derivada del desarrollo de la infraestructura tanto público como privada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la construcción tiene un impacto significativo en el Producto Interno Bruto (PIB) habiendo representado alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en años recientes, aunado a ello, según datos del INEGI, la industria de la construcción emplea a **casi 7 millones de personas**, lo que representa aproximadamente el 10% de la población económicamente activa del país. La **mayoría** de los empleos en este sector son mano de obra directa, tanto calificada como no calificada.

La Industria de la construcción posee dos vertiente jurídicas sumamente importantes; la primera es la de carácter privado, la relación entre particulares, que de acuerdo al asunto concreto se ve inmerso en relación puramente civil, es decir, con flexibilidad y libertad de acuerdos, de conformidad al principio de rango constitucional de autonomía de la voluntad; la segunda, es la de carácter público, que refiere al contrato de obra pública, es decir, la relación entre uno o más particulares y el gobierno, que, aunque es igualmente regida por aquel principio de autonomía de la voluntad, se encuentra sujeto a una norma específica, misma que dota al gobierno de un poder superior que el de los particulares, poniendo en un menor plano la potestad del particular.

A tenor de lo antes expuesto, y considerando la flexibilidad y autonomía de los contratos de obra privada, cobra entonces relevancia atender la estabilidad de la segunda, de los contratos de obra pública, por un lado, para efecto de que la misma supra subordinación que se ejerce en el actuar del ejecutivo ante la ciudadanía, no se ejerza como tal en una situación contractual, sino mas bien, que aunque las disposiciones normativas deban ser acotadas o específicas, estas no disten



mucho de las relaciones contractuales de carácter privado, a fin de no vulnerar los derechos de los particulares, ni tampoco el de los ciudadanos a través de la investidura del ejecutivo; y por otro lado, para efecto de actualizar la ley de acuerdo a la necesidad de la sociedad y de la ciudadanía local, y así contar con una ley que goce de armonía con las demás.

La presente propuesta de modificación, actualización y adición a la Ley de Obras Públicas de Nuevo León surge ante la necesidad de modernizar un marco normativo que ha quedado rezagado frente a las dinámicas actuales de la industria de la construcción. Este esfuerzo busca impulsar métodos alternos para la solución de conflictos, la digitalización de los procesos de licitación y contratación, así como la capacitación continua de contratistas y trabajadores.


PRIMERO. MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y DISPUTE BOARDS: IMPULSO A LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

La industria de la construcción es propensa a conflictos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden retrasar proyectos y generar costos adicionales.

Incumplimiento de plazos de ejecución del proyecto. El retraso en la entrega de un proyecto es una de las principales fuentes de conflicto. Estos retrasos pueden deberse a factores como mala planificación, falta de recursos, problemas climáticos, retrasos en la obtención de permisos o la aparición de problemas imprevistos durante la construcción. Los retrasos pueden aumentar los costos del proyecto, afectar la reputación de los involucrados y generar demandas por incumplimiento contractual.

Problemas con permisos y zonificación. El incumplimiento de las regulaciones locales, los retrasos en la obtención de permisos o la construcción en áreas que no están zonificadas para el uso propuesto pueden llevar a conflictos entre los desarrolladores, contratistas y autoridades locales. Esto puede detener o cancelar un proyecto y conllevar sanciones financieras o legales para los responsables.

Problemas de calidad y defectos en el proyecto de construcción. Los defectos en la construcción, como el uso de materiales de baja calidad, errores en la ejecución o en los acabados, y problemas estructurales, pueden causar conflictos importantes entre los



contratistas, subcontratistas y propietarios. Estos problemas a menudo se descubren después de que el proyecto ha sido entregado y pueden implicar gastos adicionales de reparación, problemas legales y reclamos de garantía.


Responsabilidad civil ante daños a terceros. Los proyectos de construcción a menudo conllevan riesgos de daños a propiedades cercanas o lesiones a personas ajenas al proyecto, como peatones o residentes. Los conflictos en torno a la responsabilidad civil pueden surgir si los seguros no cubren los daños, si los afectados consideran que no se han tomado las medidas de seguridad adecuadas o si no se llega a un acuerdo sobre la compensación.

Incumplimiento de pagos al contratista. Otro conflicto frecuente es el retraso o incumplimiento en el pago a contratistas y subcontratistas. Esto puede deberse a problemas de financiamiento por parte del propietario o disputas sobre la calidad del trabajo entregado. Este tipo de incumplimiento puede generar la suspensión de las obras, penalizaciones legales e incluso la resolución de los contratos.

El uso de métodos alternativos de resolución de conflictos en la industria de la construcción a nivel internacional ha crecido considerablemente debido a su efectividad para evitar largos y costosos litigios. Los principales métodos utilizados en este sector incluyen la mediación, el arbitraje y los "dispute boards" o paneles técnicos.

Mediación. Según González de Cossío, la mediación es un proceso voluntario en el que un tercero neutral, llamado mediador, facilita la comunicación entre las partes en conflicto para ayudarlas a llegar a un acuerdo. Es un proceso flexible y confidencial que busca la colaboración entre las partes para encontrar una solución que beneficie a ambos, sin necesidad de imponer una decisión. La mediación se caracteriza por su informalidad y la posibilidad de mantener las relaciones comerciales intactas, siendo más ágil y menos costosa que el arbitraje o el litigio.

En países como Estados Unidos, el 76% de los encuestados en estudios recientes mencionaron haber utilizado la mediación en disputas de construcción en el último año. La mediación es apreciada por su capacidad de mantener relaciones comerciales y reducir costos, ya que puede ser rápida, con la mayoría de los casos resueltos en uno o dos días.




Arbitraje. González de Cossío lo define como un proceso formal en el que las partes acuerdan someter sus disputas a un árbitro o panel de árbitros que emiten una decisión vinculante, conocida como laudo arbitral. Este método es particularmente útil en la industria de la construcción por su especialización y rapidez en comparación con los tribunales judiciales. El arbitraje es más formal que la mediación y generalmente se utiliza cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo a través de la negociación o la mediación.

Sigue siendo una opción común para resolver conflictos en la industria. En países como el Reino Unido y Australia, se estima que un gran número de disputas de construcción son resueltas por arbitraje, que, aunque es más formal que la mediación, sigue siendo menos costoso que el litigio.

Dispute Boards. Los Dispute Boards, de acuerdo con González de Cossío, son paneles de expertos independientes que acompañan el desarrollo de un proyecto de construcción para intervenir de manera preventiva o resolutive en caso de que surjan disputas. Estos paneles pueden emitir recomendaciones no vinculantes o decisiones obligatorias, dependiendo de la configuración acordada por las partes. Los Dispute Boards son especialmente efectivos en proyectos de infraestructura y construcción de larga duración, donde pueden evitar que los conflictos escalen y paralicen el progreso del proyecto.

Este método ha sido adoptado en regiones como Asia (Hong Kong y China) y también en México. En estos casos, se considera que los dispute boards ayudan a resolver conflictos en proyectos de infraestructura de gran envergadura.

A efecto de lo anterior, nuestra Constitución Federal en su artículo 17 párrafo tercero prevé la anteposición de un procedimiento abreviado extrajudicial para la resolución inmediata y simplificada de los conflictos que pudieran llegarse a suscitar en las relaciones jurídicas, habiendo nacido con base en esta disposición, diversos cuerpos normativos generales y locales que soportan los conceptos de Mediación y el Arbitraje, no obstante, dichas normativas se han enfocado a empoderar únicamente el procedimiento de Mediación, habiendo dejado el Arbitraje a un clausulado abierto pobremente regulado por el Código de Comercio y el Código Civil



Federal, y los Dispute Boards o también conocidos como Paneles Técnicos sin adopción formal alguna.


Ahora bien, en México, el uso de Dispute Boards tiene sus antecedentes en la implementación de mejores prácticas internacionales en proyectos de infraestructura. Las instituciones encargadas de la obra pública, como el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), y empresas privadas han comenzado a adoptar esta metodología, influenciadas por ejemplos de su éxito en otras jurisdicciones, como los Estados Unidos y el Reino Unido. Las Dispute Boards fueron informalmente introducidas en el contexto mexicano a través de proyectos apoyados por organismos internacionales y bancos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven su uso en proyectos financiados por ellos.

La incorporación de métodos alternos para la solución de los conflictos antes expuestos, tales como el arbitraje, la mediación y los paneles técnicos presenta múltiples ventajas:

Estos métodos permiten resolver disputas de manera más rápida y menos costosa que los procedimientos judiciales tradicionales, ofrecen un espacio para el diálogo y la negociación, permitiendo soluciones más creativas y ajustadas a las necesidades de las partes involucradas, y finalmente, al reducir la carga sobre los tribunales, se contribuye a un sistema judicial más eficiente en general.

En México, la inversión en infraestructura ha sido clave para el desarrollo económico. El INEGI reporta que gran parte de la inversión pública y privada en la construcción está destinada a proyectos de infraestructura básica, como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y viviendas, no obstante, particularmente en el Estado de Nuevo León, por su posición geográfica la inversión extranjera directa se ha potenciado, lo que ha impulsado la construcción y ampliación de la infraestructura pública, e incluso el financiamiento y colaboración en proyectos público privados.

SEGUNDO.DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. La digitalización en los procesos de contratación y licitación de obra pública en México ha traído una serie de beneficios clave, particularmente en términos de transparencia, eficiencia y reducción de costos.



Transparencia y reducción de la corrupción. Permite un acceso más amplio a los documentos clave del proceso de licitación, lo que fortalece la transparencia y disminuye las oportunidades de corrupción. Plataformas como CompraNet centralizan y hacen públicos documentos importantes, como convocatorias, actas de fallo y contratos, reduciendo la opacidad que antes caracterizaba a estos procedimientos


Eficiencia en los procesos. Permite automatizar varios pasos del proceso, como la gestión del gasto, la planeación, la evaluación de ofertas, y la formalización de contratos. Esto resulta en procedimientos más ágiles y menos costosos, al reducir el tiempo y los recursos dedicados a tareas administrativas que antes eran manuales. Además, el acceso en línea a toda la información relevante elimina la necesidad de múltiples visitas físicas a las oficinas, mejorando la eficiencia tanto para los funcionarios como para los oferentes.

Mayor competencia y participación. Al simplificar los procesos y hacer más accesibles los documentos, la digitalización también facilita una mayor participación de empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Esto fomenta una competencia más equitativa, lo que a su vez mejora la calidad de las propuestas y potencialmente reduce los costos finales para el gobierno.

Reducción de costos. Al digitalizar los procesos y reducir la burocracia, se minimizan los costos operativos y de transacción, tanto para el sector público como para los proveedores. Un ejemplo es la experiencia de Chile, donde la digitalización permitió ahorrar millones de dólares al evitar prácticas como la fijación de precios o sobre costos en las licitaciones.

En conjunto, estas mejoras ayudan a fortalecer la confianza pública en los procesos de obra pública y contribuyen a un uso más eficiente de los recursos gubernamentales.

Reducción de Huella Ambiental. Al prescindir de la presentación de propuestas presenciales, de manera gradual se irá disminuyendo el uso de papel y en consecuencia, existirá una aportación institucional a la lucha contra la tala de árboles.



TERCERO. IMPULSO A LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN LA OBRA.

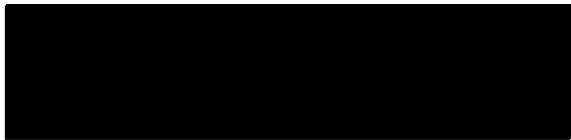
La capacitación continua en la industria de la construcción es de vital importancia para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, así como para evolucionar en los procesos tecnológicos constructivos, esto es no solo una responsabilidad legal de los patrones, sino también una necesidad para el desarrollo sostenible del sector.

El Artículo 123, apartado A, de la Constitución establece los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo el derecho a condiciones de trabajo que garanticen su seguridad y salud. La capacitación continua es un medio fundamental para asegurar que los trabajadores estén preparados para enfrentar los riesgos inherentes a su trabajo, particularmente en sectores peligrosos como la construcción. Este artículo impone a los patrones la obligación de proporcionar las condiciones necesarias para la seguridad en el trabajo.

Aunado a ello, la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 132, establece que los patrones deben proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores para asegurar su competencia en el desempeño de su trabajo y para reducir los riesgos laborales. Específicamente, en el Artículo 153-A y siguientes, se establece el derecho de los trabajadores a recibir capacitación y adiestramiento, y la obligación de los patrones de ofrecerla de manera continua. Esto incluye áreas como seguridad en la obra, manejo de residuos y responsabilidad civil.

En el contexto de la construcción, la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011 establece los lineamientos de seguridad y salud en los trabajos de construcción, señalando que la capacitación debe abordar, entre otros temas, los riesgos específicos del trabajo, como los protocolos de seguridad, el uso de equipo de protección personal y las contingencias ambientales.

La capacitación laboral está igualmente respaldada por convenios internacionales, en especial aquellos adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, ratificado por México, insta a los Estados miembros a



implementar medidas que incluyan la capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Además, el Convenio 187 refuerza la promoción de un entorno de trabajo seguro y saludable, lo que implica un enfoque proactivo de formación y prevención de riesgos.

Ahora bien, aprovechando dichas prerrogativas, a fin de acotar las necesidades sociales con un enfoque responsable, así como con la normatividad federal e internacional, es menester que las capacitaciones incluyan la seguridad en la obra (como la prevención de accidentes), la responsabilidad civil en caso de daños a terceros y los protocolos de contingencia ambiental de manera formal y obligatoria, y aunado a ello, que aquellos quienes toman las decisiones relevantes dentro de las empresas del sector, cuenten con ese conocimiento, a fin de ejercer una correcta supervisión de su personal.

Algunas de las propuestas de modificación y/o actualización se plantean de la manera siguiente:

PROPUESTA	MOTIVO
<p>Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:</p> <p>I.- Contraloría: La Contraloría y Transparencia Gubernamental, y en el ámbito municipal, el órgano de control interno o el Síndico que corresponda conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal;</p> <p>II.- Contratista: La persona Física o moral que celebre contratos con las dependencias y entidades para la ejecución de obras públicas y prestación de servicios relacionados con las mismas;</p> <p>III.- Dependencia: Las que se crean o establezcan conforme a las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal y Municipal, incluyendo sus órganos desconcentrados;</p> <p>IV.- Entidades: Los organismos estatales o municipales siguientes: descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades o</p>	<p><i>En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.</i></p> <p><i>Asimismo, se Pretende incluir los conceptos relativos a los MASC (Métodos alternos para la solución de conflictos).</i></p>

asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y los que determinen las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal y Municipal vigentes en el Estado;

V.- Tesorería: Secretaria de finanzas y Tesorería general del estado y las tesorerías municipales en el ámbito de su competencia.

VI.- Sector: El agrupamiento definido de entidades que, en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se realice a través de la dependencia que en su caso designe el Ejecutivo Estatal o el Ayuntamiento, según corresponda, como coordinadora del sector respectivo;

VII.- Secretaria: Dependencia centralizada del gobierno estatal o municipal encargada de la administración y ejecución de la obra pública y los servicios relacionados

VIII.- Tratados: Los definidos como tales por la fracción I del Artículo 2º de la Ley Sobre Celebración de Tratados.

IX.- Mediación: Proceso de solución de conflictos, distinto a la jurisdicción estatal, que surge por el acuerdo de voluntades entre el Estado o municipios y el Contratista, en el cual, un tercero actúa como auxiliar en la negociación entre las partes, sin interferir directamente en los términos.

X.- Arbitraje: Proceso de solución de conflictos, distinto a la jurisdicción estatal, que surge por el acuerdo de voluntades entre el Estado o municipios, y el Contratista, en el cual, un tercero especialista en la materia y en los aspectos técnicos y jurídicos de la obra o servicio interviene a fin de determinar la solución justa del conflicto mediante un laudo con carácter de cosa juzgada.

XI.- Panel Técnico: mesa técnica conformada por ingenieros civiles y juristas especialistas en el sector de la construcción, y que funciona como auxiliar de las controversias que pudieran surgir en

el inicio, desarrollo y conclusión del proyecto de obra pública o servicio relacionado con la misma.

[...]

Artículo 8o.- Las atribuciones que en materia de obra pública corresponde ejercer al Gobierno del Estado, sin menoscabo de las que le otorgan otras disposiciones legales, son las siguientes:

I.- A la **Secretaría**, como Coordinadora del Sector de Obras Públicas: La administración de las etapas que comprende la obra pública y su ejecución en cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 7o. de esta Ley, cuando ésta se encuentre a cargo del Estado;

II.- A la **Tesorería**: La correcta administración y uso de los recursos financieros afectos a la obra pública cuya ejecución está a cargo del Gobierno del Estado, y promover al efecto la aplicación de los mecanismos y procedimientos conducentes;

III.- A la Contraloría: Vigilar y verificar la exacta aplicación y cumplimiento de la presente Ley y de cada una de las etapas de la obra pública que se realicen con recursos del Estado y emitir los mecanismos y procedimientos de control aplicables; y

IV.- A las demás dependencias de la Administración Central: Participar en el cumplimiento de las responsabilidades que esta Ley les impone y proporcionar la información conducente a efecto de concentrar las necesidades de obra pública que se les presenten en el ámbito de su competencia.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

Artículo 12°.- La **Secretaría**, la **Tesorería**, la **Contraloría**, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de obra pública y servicios relacionados con la misma; la verificación de precios, pruebas de calidad, y otras actividades

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

<p>vinculadas con el objeto de esta Ley. La contratación de la asesoría técnica se sujetará a los procedimientos de adjudicación previstos en este ordenamiento.</p> <p>[...]</p>	
<p>Artículo 14o.- Todo conflicto que se suscite entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares con motivo de la aplicación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, se regirá por el principio de mediación y justicia restaurativa para lo cual, se deberá acudir al uso de métodos alternos a la solución de controversias, previo a someterlo a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa</p> <p>La cláusula de mediación será obligatoria, mientras que la cláusula arbitral y/o de implementación de paneles técnicos durante los proyectos se regirán por el artículo 61 Fracción XI de esta Ley.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio del derecho que los particulares tienen de presentar el recurso de inconformidad ante la Contraloría, que, en la esfera administrativa, presenten los particulares en relación con los actos antes referidos.</p> <p>Podrá pactarse cláusula arbitral en contratos respecto de aquellas controversias que determinen conjuntamente la Secretaría y la Contraloría, de conformidad con el reglamento que se cree para tales efectos.</p>	<p><i>En este artículo se pretende robustecer el uso de los MASC (Métodos alternos para la solución de conflictos).</i></p>
<p>Artículo 18o.- En la planeación, programación y presupuestación de la obra pública, las dependencias y entidades deberán ajustarse a:</p> <p>I.- Los objetivos, prioridades y políticas señaladas en los pactos, planes y programas estatales y municipales de desarrollo tomando en consideración la observancia de las normas y lineamientos que de esta Ley se deriven;</p>	<p><i>En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.</i></p>

II.- La disponibilidad de áreas y predios para la obra pública, previa consulta con la **Secretaría** y, en su caso, con las dependencias competentes que designen los Ayuntamientos, para que éstas, en el ejercicio de sus atribuciones, determinen su conveniencia y viabilidad conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia;

Artículo 23o.- La **Secretaría** estará encargada de planear, proyectar, programar, presupuestar, ejecutar, conservar, modificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la obra pública de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, y de coadyuvar con la emisión de las bases para las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal. Asimismo, expedirá las bases a que deberán ajustarse las licitaciones de la obra pública.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

Artículo 23 BIS 1.- El registro estatal de contratistas de obras públicas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refiere el párrafo primero del Artículo 1° de esta Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a esta Ley.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro estatal de contratistas de obras públicas a la **Secretaría**, la cual, previa validación de la información presentada por el contratista a través de la documentación respectiva que proporcione llevará a cabo la inscripción correspondiente; asimismo, la Contraloría remitirá a la **Secretaría** la información con la que cuente y que sea materia de dicho registro, valorando ésta última la inclusión dentro del mismo.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

Artículo 23 BIS 3.- El registro de contratistas clasificará la información de los contratistas de acuerdo con su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su caso, los Municipios. El citado registro será diseñado y administrado por la **Secretaría** y contendrá cuando menos los siguientes datos de los contratistas:

I. a XII. [...]

Artículo 23 BIS 4.- La **Secretaría**, como responsable de la administración del registro estatal de contratistas, tendrá las siguientes funciones: I.- Proporcionar a las dependencias y entidades estatales las claves y contraseñas de acceso para validar o consultar la información en el registro; II.-Administrar la información contenida en el registro; III.-Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro; y IV.-Definir estándares y procedimientos de calidad y seguridad de la información contenida en el registro, que garanticen su inalterabilidad y conservación.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

Artículo 23 BIS 5.- Para el caso de obras que estén a cargo de los Municipios, éstos **deberán** llevar su propio registro **electrónico**, observando las disposiciones conducentes de este capítulo o bien regirse por el de la **Secretaría**, previo convenio que al efecto se suscriba entre ambas entidades.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

Asimismo, incluir la obligación de llevar un registro electrónico

Artículo 28o.- Los contratos de obra pública, por regla general, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes **por medios electrónicos, o bien, por medio de paquete cerrado, según corresponda, que serán aperturados públicamente**, a fin de asegurar al Estado y Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

En este artículo se pretende migrar al procedimiento de licitaciones híbrido, tanto físico como digital.

Artículo 31o.- Las convocatorias, que podrán referirse a una o más obras o servicios, se publicarán, por una sola vez, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

los diarios de mayor circulación en el Estado, y deberán contener:

[...]

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a convocatorias formuladas por los Municipios, únicamente cuando éstos hayan convenido con **Secretaría** la utilización del registro estatal de contratistas de obras públicas o bien cuando cuenten con un registro de contratistas propio.

[...]

Artículo 38o.- En las licitaciones públicas, **se hará entrega de la propuesta técnica y la propuesta económica, debiendo allegar la propuesta técnica por medios electrónicos a través de la plataforma pública habilitada para tales efectos, y la propuesta económica físicamente, por escrito en paquete cerrado**, incluyéndose en ésta última la garantía de seriedad de las ofertas.

Una vez presentadas las propuestas, ninguno de los participantes podrá retirarla durante el proceso de licitación. El acto de apertura de proposiciones será público.

Artículo 43.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Asimismo, las dependencias y entidades podrán, en todo tiempo, dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general, previa anuencia de la **Secretaría** o la Autoridad Municipal, según corresponda.

Artículo 49.- Al acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, se invitará a un representante de la Contraloría.

[...]

En este artículo se pretende migrar al procedimiento de licitaciones híbrido, tanto físico como digital.

En este artículo se pretende actualizar las Denominaciones de las dependencias responsables.

En este artículo se pretende migrar al procedimiento de licitaciones híbrido, tanto físico como digital.

[...]

El acto de apertura de la propuesta técnica se podrá llevar a cabo de manera remota mediante la plataforma que se habilite para tales efectos, en la fecha y hora señaladas.

En cuanto al acto de apertura de la propuesta económica, esta se llevará a cabo de manera presencial en la fecha, hora y lugar que se señale para tales efectos, debiendo acudir los licitantes y/o sus representantes debidamente acreditados, quienes, durante dicho proceso, al ser nombrados, harán entrega de la propuesta en paquete cerrado. El licitante y/o representante deberá acudir con poder notariado original o certificado y mostrarlo a fin de que acredite su personalidad.

En caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, el representante común para estos efectos será quien entregue la proposición **debiendo acudir con poder notariado original o certificado y mostrarlo a fin de que acredite su personalidad ante la persona moral correspondiente, y una carta de conformidad de representación común.**

En caso de que el licitante sea persona física únicamente deberá acreditar su personalidad mediante identificación oficial.

Artículo 51.- En la primera etapa a través de la plataforma en línea habilitada para tales efectos, se procederá a la apertura de la propuesta técnica, en la cual se revisará el allegue de la documentación y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Los documentos que contendrá el sobre cerrado que integran la propuesta técnica, según las características de la obra, serán:

I. a V. [...]

VI.- Certificación otorgada al Director, Titular y/o Representante de la persona moral, o bien, certificación otorgada a la persona física, en materia de Manejo de Residuos y Protocolos de

En este artículo se pretende migrar al procedimiento de licitaciones híbrido, tanto físico como digital.

Así también, se pretende impulsar la capacitación y la responsabilidad empresarial.

Contingencia Ambiental emitida por Instituto de Capacitación especializado en la Industria de la Construcción, validado con firma electrónica del titular de dicho instituto.

VII.- Certificación otorgada al Director, Titular y/o Representante de la persona moral, o bien, certificación otorgada a la persona física, en materia de Responsabilidad Civil y Seguridad en la Obra emitida por Instituto de Capacitación especializado en la Industria de la Construcción, validado con firma electrónica del titular de dicho instituto.

Artículo 52.- Los licitantes y los servidores públicos que expresamente hubiesen sido designados por la dependencia o entidad que se encuentren presentes durante la apertura técnica rubricarán con la firma electrónica habilitada para tales efectos todas las propuestas técnicas presentadas.

Asimismo, rubricarán mediante su firma física, la documentación contenida en el paquete de las propuestas económicas de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y quedarán en custodia de la propia dependencia o entidad, quien informará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas.

[...]

[...]

Artículo 61.- Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las declaraciones y estipulaciones referentes a:

I. a X. [...]

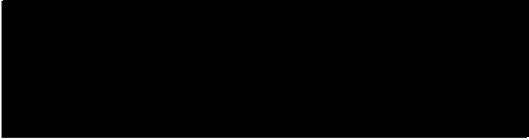
XI.- En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes resolverán en términos del artículo 14 de esta Ley, controversias que se pudieran suscitar durante y después de los procesos constructivos y demás problemas específicos de carácter técnico y administrativo, debiendo considerar la implementación en dicho clausulado, de los procedimientos de Arbitraje y/o Páneos Técnicos a que refieren las Fracciones X y XI del artículo 2 de

En este artículo se pretende migrar al procedimiento de licitaciones híbrido, tanto físico como digital.

Así también se pretende subsanar un punto de ilegalidad a través de la eliminación del punto que refiere a que el hecho de que “servidores públicos” no suscriban, no invalida el acto, lo cual es ilegal.

En este artículo se pretende robustecer el uso de los MASC (Métodos alternos para la solución de conflictos).

<p>esta ley en obras o servicios cuyo monto de asignación exceda la cantidad de \$25,000,000.00 veinticinco millones de pesos.</p>	
<p>Artículo 66.- [...] La persona que se designe como supervisor deberá tener la experiencia comprobada en el mismo tipo de obra. En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica.</p> <p>[...]</p>	<p><i>En este punto se pretenden subsanar puntos que afectan al constructor al robustecer su documental probatorio administrativo.</i></p>
<p>Artículo 67.- Para los efectos del Artículo anterior, el residente de supervisión tendrá a su cargo cuando menos:</p> <p>I.- Llevar la bitácora de la obra, en la que obligatoriamente se anotarán todas las incidencias relevantes así como las estimaciones relativas a la misma y que estará disponible para el contratista, en las oficinas de la supervisión de obra, en días y horas hábiles; todas las notas deberán ser firmadas por el residente de la supervisión y el contratista.</p> <p>II. a VI. [...]</p>	<p><i>En este punto se pretenden subsanar puntos que afectan al constructor al robustecer su documental probatorio administrativo.</i></p>
<p>Artículo 76.- Sólo mediante convenios las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, siempre que éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.</p> <p>Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 61.</p> <p>[...]</p>	<p><i>En este punto se pretenden subsanar puntos que afectan al constructor al permitir la ampliación de posibilidad de suscribir un convenio adicional por monto excedente.</i></p>



Aunado a lo anterior, no solo se pretende proponer modificar la ley, sino que también se adhiere mas adelante, en la propuesta de decreto de los artículos 124 al 128 el establecimiento de una base certera en materia de soluciones de conflictos.

La modificación, actualización y adición a la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León es un paso esencial hacia la modernización de la industria de la construcción en la entidad. Al promover métodos alternos de solución de conflictos, la digitalización de los procesos y la capacitación de los involucrados, se busca crear un entorno más eficiente, transparente y competitivo que beneficie tanto a los entes gubernamentales como a los contratistas y, en última instancia, a la ciudadanía. Esta reforma no solo responde a las necesidades actuales, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible y responsable en el sector de la construcción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- *Se reforma el artículo 2, las fracciones I y II del artículo 8, el primer párrafo del artículo 12, el artículo 14, la fracción II del artículo 18, el artículo 23, el segundo párrafo del artículo 23 Bis 1, el segundo párrafo del artículo 23 Bis 3, el primer párrafo del artículo 23 Bis 4, los artículos 23 Bis 5, 28, el quinto párrafo del artículo 31, el primer párrafo del artículo 38, el segundo párrafo del artículo 43, el artículo 49, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 51, el artículo 52, la fracción XI del artículo 61, la fracción I del artículo 67, el segundo párrafo del artículo 76, la denominación del Título Sexto y del Capítulo Único del Título Sexto. Se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 51, un cuarto párrafo al artículo 52, el Capítulo segundo denominado “De la Mediación, Arbitraje y el Panel Técnico” dentro del Título Sexto con los artículos 124, 125, 126, 127 y 128 todos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para quedar como sigue:*

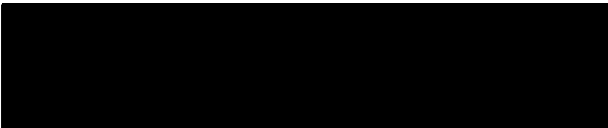
Artículo 2o.- *Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:*





- I. Arbitraje:** *Proceso de solución de conflictos, distinto a la jurisdicción estatal, que surge por el acuerdo de voluntades entre el Estado o municipios, y el Contratista, en el cual, un tercero especialista en la materia y en los aspectos técnicos y jurídicos de la obra o servicio interviene a fin de determinar la solución justa del conflicto mediante un laudo con carácter de cosa juzgada.*
- II. Contraloría:** *La Contraloría y Transparencia Gubernamental, y en el ámbito municipal, el órgano de control interno o el Síndico que corresponda conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal;*
- III. Contratista:** *La persona Física o moral que celebre contratos con las dependencias y entidades para la ejecución de obras públicas y prestación de servicios relacionados con las mismas;*
- IV. Dependencia:** *Las que se crean o establezcan conforme a las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal y Municipal, incluyendo sus órganos desconcentrados;*
- V. Entidades:** *Los organismos estatales o municipales siguientes: descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y los que determinen las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal y Municipal vigentes en el Estado;*
- VI. Mediación:** *Proceso de solución de conflictos, distinto a la jurisdicción estatal, que surge por el acuerdo de voluntades entre el Estado o municipios y el Contratista, en el cual, un tercero actúa como auxiliar en la negociación entre las partes, sin interferir directamente en los términos.*
- VII. Panel Técnico:** *mesa técnica conformada por ingenieros civiles y juristas especialistas en el sector de la construcción, y que funciona como auxiliar de las controversias que pudieran surgir en el inicio, desarrollo y conclusión del proyecto de obra pública o servicio relacionado con la misma.*

Cuando la ejecución de la obra esté a cargo de un Municipio, toda referencia en esta Ley al Titular del Ejecutivo del Estado, la Secretaría, Tesorería y Contraloría del Estado, se entenderá hecha para el órgano equivalente del Municipio correspondiente.

- 
- VIII. **Secretaría:** Dependencia centralizada del gobierno estatal o municipal encargada de la administración y ejecución de la obra pública y los servicios relacionados con la misma.
- IX. **Sector:** El agrupamiento definido de entidades que, en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se realice a través de la dependencia que en su caso designe el Ejecutivo Estatal o el Ayuntamiento, según corresponda, como coordinadora del sector respectivo.
- X. **Tesorería:** Dependencia centralizada del gobierno estatal encargada de las Finanzas y Tesorería, las tesorerías municipales en el ámbito de su competencia.
- XI. **Tratados:** Los definidos como tales por la fracción I del Artículo 2º de la Ley Sobre Celebración de Tratados.

Artículo 8o.- Las atribuciones que en materia de obra pública corresponde ejercer al Gobierno del Estado, sin menoscabo de las que le otorgan otras disposiciones legales, son las siguientes:

I.- A la **Secretaría**, como Coordinadora del Sector de Obras Públicas: La administración de las etapas que comprende la obra pública y su ejecución en cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 7o. de esta Ley, cuando ésta se encuentre a cargo del Estado;

II.- A la **Tesorería**: La correcta administración y uso de los recursos financieros afectos a la obra pública cuya ejecución está a cargo del Gobierno del Estado, y promover al efecto la aplicación de los mecanismos y procedimientos conducentes;

III. a IV. [...]

Artículo 12º.- La **Secretaría**, la **Tesorería**, la **Contraloría**, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de obra pública y servicios relacionados con la misma; la verificación de precios, pruebas de calidad, y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. La contratación de la asesoría técnica se sujetará a los procedimientos de adjudicación previstos en este ordenamiento.



[...]

Artículo 14o.- Todo conflicto que se suscite entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares con motivo de la aplicación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, se regirá por el principio de mediación y justicia restaurativa para lo cual, se deberá acudir al uso de métodos alternos a la solución de controversias, previo a su misión de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa

La cláusula de mediación será obligatoria, mientras que la cláusula arbitral y/o de implementación de paneles técnicos durante los proyectos se regirán por el artículo 61 Fracción XI de esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que los particulares tienen de presentar el recurso de inconformidad ante la Contraloría, que, en la esfera administrativa, presenten los particulares en relación con los actos antes referidos.


Podrá pactarse cláusula arbitral en contratos respecto de aquellas controversias que determinen conjuntamente la Secretaría y la Contraloría, de conformidad con el reglamento que se cree para tales efectos.

Artículo 18o.- [...]

I.- [...]

II.- La disponibilidad de áreas y predios para la obra pública, previa consulta con la **Secretaría** y, en su caso, con las dependencias competentes que designen los Ayuntamientos, para que éstas, en el ejercicio de sus atribuciones, determinen su conveniencia y viabilidad conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia;

III a la V.- [...]



Artículo 23o.- La **Secretaría** estará encargada de planear, proyectar, programar, presupuestar, ejecutar, conservar, modificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la obra pública de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, y de coadyuvar con la emisión de las bases para las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal. Asimismo, expedirá las bases a que deberán ajustarse las licitaciones de la obra pública.

Artículo 23 BIS 1.- [...]

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro estatal de contratistas de obras públicas a la **Secretaría**, la cual, previa validación de la información presentada por el contratista a través de la documentación respectiva que proporcione llevará a cabo la inscripción correspondiente; asimismo, la Contraloría remitirá a la **Secretaría** la información con la que cuente y que sea materia de dicho registro, valorando ésta última la inclusión dentro del mismo.

Artículo 23 BIS 3.- [...]

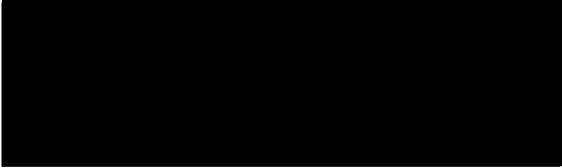
El citado registro será diseñado y administrado por la **Secretaría** y contendrá cuando menos los siguientes datos de los contratistas:

I a la XII.- [...]

Artículo 23 BIS 4.- La **Secretaría**, como responsable de la administración del registro estatal de contratistas, tendrá las siguientes funciones:

I a la IV.- [...]

Artículo 23 BIS 5.- Para el caso de obras que estén a cargo de los Municipios, éstos **deberán** llevar su propio registro, observando las disposiciones conducentes de este capítulo o bien regirse por el de la **Secretaría**, previo convenio que al efecto se suscriba entre ambas entidades.



Artículo 28o.- Los contratos de obra pública, por regla general, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes **por medios electrónicos, o bien, por medio de paquete cerrado, según corresponda, que serán aperturados públicamente**, a fin de asegurar al Estado y Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Artículo 31o.- Las convocatorias, que podrán referirse a una o más obras o servicios, se publicarán, por una sola vez, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, y deberán contener:

I a la XVII.- [...]

[...]

[...]

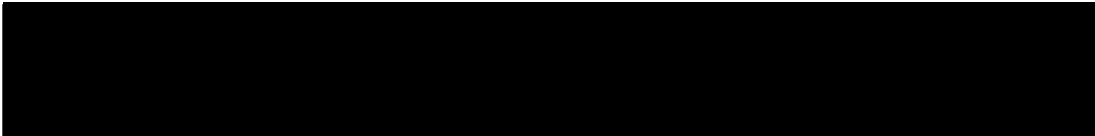
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a convocatorias formuladas por los Municipios, únicamente cuando éstos hayan convenido con **la Secretaría la utilización del registro estatal de contratistas de obras públicas o bien cuando cuenten con un registro de contratistas propio.**

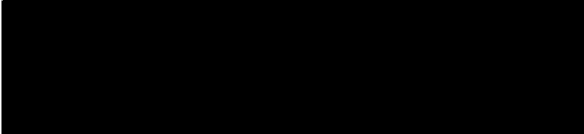
[...]

Artículo 38o.- En las licitaciones públicas, **se hará entrega de la propuesta técnica y la propuesta económica, debiendo allegar la propuesta técnica por medios electrónicos a través de la plataforma pública habilitada para tales efectos, y la propuesta económica físicamente, por escrito en paquete cerrado, incluyéndose en ésta última la garantía de seriedad de las ofertas.**

[...]

Artículo 43.- [...]





*Asimismo, las dependencias y entidades podrán, en todo tiempo, dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general, previa anuencia de la **Secretaría** o la Autoridad Municipal, según corresponda.*

Artículo 49.- Al acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, se invitará a un representante de la Contraloría.

Además, podrán ser invitados representantes de las Cámaras y Colegios de Profesionales que correspondan, según la naturaleza de la obra.


El acto de presentación y apertura será presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de esta Ley.

El acto de apertura de la propuesta técnica se podrá llevar a cabo de manera remota mediante la plataforma que se habilite para tales efectos, en la fecha y hora señaladas.

En cuanto al acto de apertura de la propuesta económica, esta se llevará a cabo de manera presencial en la fecha, hora y lugar que se señale para tales efectos, debiendo acudir los licitantes y/o sus representantes debidamente acreditados, quienes, durante dicho proceso, al ser nombrados, harán entrega de la propuesta en paquete cerrado. El licitante y/o representante deberá acudir con poder notariado original o certificado y mostrarlo a fin de que acredite su personalidad.

En caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, el representante común para estos efectos será quien entregue la proposición, debiendo acudir con poder notariado original o certificado y mostrarlo a fin de que acredite su personalidad ante la persona moral correspondiente, y una carta de conformidad de representación común.

En caso de que el licitante sea persona física únicamente deberá acreditar su personalidad mediante identificación oficial.



Artículo 51.- En la primera etapa, a través de la plataforma en línea habilitada para tales efectos, se procederá a la apertura de la propuesta técnica, en la cual se revisará el allegue de la documentación y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

[...]

I a la III.- [...]

IV.- En su caso, las partes de la obra que se subcontratarán o los materiales o equipo que pretenda adquirir y que incluyan su instalación;


V.- [...]

VI.- Certificación otorgada al Director, Titular y/o Representante de la persona moral, o bien, certificación otorgada a la persona física, en materia de Manejo de Residuos y Protocolos de Contingencia Ambiental emitida por Instituto de Capacitación especializado en la Industria de la Construcción, validado con firma electrónica del titular de dicho instituto; y

VII.- Certificación otorgada al Director, Titular y/o Representante de la persona moral, o bien, certificación otorgada a la persona física, en materia de Responsabilidad Civil y Seguridad en la Obra emitida por Instituto de Capacitación especializado en la Industria de la Construcción, validado con firma electrónica del titular de dicho instituto.

Artículo 52.- Los licitantes y los servidores públicos que expresamente hubiesen sido designados por la dependencia o entidad que se encuentren presentes durante la apertura técnica, rubricarán con la firma electrónica habilitada para tales efectos todas las propuestas técnicas presentadas.

Asimismo, rubricarán mediante su firma física, la documentación contenida en el paquete de las propuestas económicas de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y quedarán en custodia de la propia



dependencia o entidad, quien informará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas.

Durante este período, la dependencia o entidad hará el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas.

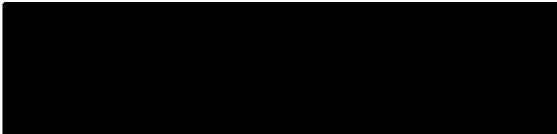
En caso de que alguno de los licitantes presentes que expresamente hubiesen sido designados por las dependencias y entidades presentes se negare a firmar las propuestas presentadas, este hecho se hará constar en el Acta, sin afectar la validez del contenido y alcance de dichos documentos.

Artículo 61.- [...]

I a la X.- [...]

*XI.- En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes resolverán en términos del artículo 14 de esta Ley, **controversias que se pudieran suscitar durante y después de los procesos constructivos** y demás problemas específicos de carácter técnico y administrativo, **debiendo considerar la implementación en dicho clausulado, de los procedimientos de Arbitraje y/o Paneles Técnicos a que refieren las Fracciones X y XI del artículo 2 de esta ley** en obras o servicios cuyo monto de asignación exceda la cantidad de \$25,000,000.00 veinticinco millones de pesos.*

*Artículo 66.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de supervisión, con anterioridad a la iniciación de la obra, y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, así como del control de la bitácora en las obras, que servirá como un medio de comunicación oficial entre la contratante y el contratista, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecución misma de la obra. La persona que se designe como supervisor deberá tener la experiencia comprobada en el mismo tipo de obra. **En la elaboración, control y***



seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica.

[...]

El residente de supervisión representará directamente a la dependencia o entidad ante el contratista y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

Artículo 67.- [...]

*I.- Llevar la bitácora de la obra, en la que obligatoriamente se anotarán todas las incidencias relevantes, **así como las estimaciones relativas a la misma** y que estará disponible para el contratista, en las oficinas de la supervisión de obra, en días y horas hábiles; todas las notas deberán ser firmadas por el residente de la supervisión y el contratista.*

II a la VI. - [...]

Artículo 76.- [...]

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberán celebrar, convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 61. Este convenio adicional deberá ser autorizado por el titular de la dependencia o entidad. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

[...]

[...]

TITULO SEXTO

Del Procedimiento Administrativo y los Métodos Alternativos

Capítulo Primero

De las Inconformidades

[...]

Capítulo Segundo



De la Mediación, el Arbitraje y el Panel Técnico

Artículo 124. - Las controversias derivadas o relacionadas con los términos y condiciones pactados en los contratos celebrados al amparo de esta ley podrán resolverse mediante los siguientes métodos:

- I. Procedimiento de Mediación***
- II. Procedimiento de Arbitraje***
- III. Paneles Técnicos durante el Proyecto***


Los métodos alternos para la solución de conflictos antes expuestos deberán acordarse en lo conducente mediante cláusula contractual de conformidad con los artículos 14 y 61 Fracción XI de esta ley.

Artículo 125. - El procedimiento arbitral y los paneles técnicos deberán substanciarse en la ciudad donde se formalice el contrato y de acuerdo con el reglamento que el ejecutivo cree para tales efectos, y en lo no previsto, deberán estarse a las disposiciones relativas al arbitraje expuestas en el Código de Comercio, y este será supervisado por la Contraloría.

Artículo 126. - El procedimiento arbitral y/o el procedimiento iniciado mediante panel técnico culmina con el laudo arbitral mismo que deberá notificarse a la Contraloría, quien ordenará a las dependencias correspondientes y/o a los contratistas que el laudo debe cumplimentarse dentro del término de quince días naturales siguientes a su notificación, salvo pacto en contrario.

Artículo 127. - La Contraloría debe solicitar a las cámaras, colegios y demás asociaciones de profesionales, propuestas de personas que puedan fungir como árbitros especializados.

Artículo 128. - Para fungir como árbitro se requiere:

- 
- I. Ser profesionista titulado como licenciado en derecho, ingeniería, arquitectura u otra profesión relacionada con la materia de esta ley;*
 - II. Acreditar experiencia mínima de cinco años de ejercicio en las materias que regula esta ley;*
 - III. Tener reconocido prestigio profesional, honorabilidad y solvencia moral;*
 - IV. No haber sido condenado por delito intencional;*
 - V. No desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios; y*
 - VI. No tener vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil o relaciones comerciales, profesionales o de amistad con las partes en conflicto.*

La Contraloría debe llevar el registro de las personas que pueden fungir como árbitros y difundir en el mes de enero de cada año la lista correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - *El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.*

SEGUNDO. - *El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a ocho meses contados a partir de su entrada en vigor.*

TERCERO. - *El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos en Materia de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de su entrada en vigor.*

[REDACTED]

SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE, AGRADECEMOS ESTA SEA PROVEÍDA DE CONFORMIDAD, SOMETIÉNDOSE A ANÁLISIS Y PONDERACIÓN DE LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS CORRESPONDIENTES, EN EL MOMENTO PROCEDIMENTAL OPORTUNO.

ATENTAMENTE.

[REDACTED]

ING. ROBERTO MACÍAS QUINTANILLA
PRESIDENTE DE LA CMIC NUEVO LEÓN



[REDACTED]

ING. ROGELIO MORALES BOTELLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO
DE LA CMIC NUEVO LEÓN

[REDACTED]

ING. RODRIGO GARZA TIJERINA
SECRETARIO DE LA CMIC NUEVO LEÓN

[REDACTED]

ING. ALBERTO RODRÍGUEZ DAVILA
VICEPRESIDENTE DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA CMIC NUEVO LEÓN

[REDACTED]

ING. JORGE A. VILLARREAL GONZÁLEZ
TESORERO DE LA CMIC NUEVO LEÓN

[REDACTED]

LIC. HUGO SÁNCHEZ GARCÍA
DIRECTOR DE LA CMIC NUEVO LEÓN

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
GARCIA
HUGO CESAR

SEXO H

DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR
CURP

FECHA DE NACIMIENTO

SECCION

VIGENCIA

INE

M. César García
SECRETARIO DE CAMPAÑA
VICERRECTOR DE OPERACIONES
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SANCHEZ<GARCIA<<HUGO<CESAR<<<<

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 OCT 2024
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Octubre 2024

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo



No autorizo



Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: _____ Núm. Ext. _____ Núm. Int. _____
Colonia: _____ Municipio: _____
Teléfono(s): _____ Estado: _____ C.P. _____

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso, señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo



No autorizo



Correo: _____

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO